

# NEW LEFT REVIEW 122

SEGUNDA ÉPOCA

MAYO - JUNIO 2020

## PANDEMIA

MIKE DAVIS	Entra en escena el monstruo	11
AI XIAOMING	Diario de Wuhan	20
MARCO D'ERAMO	La epidemia del filósofo	28
N. R. MUSAHAR	Medidas de inanición en la India	34
ROHANA KUDDUS	Limoncillo y plegarias	42
MARIO SERGIO CONTI	Pandemonio en Brasil	50
VIRA AMELI	Sanciones y enfermedad	57
R. TAGGART MURPHY	Oriente y Occidente	67

## ARTÍCULOS

MICHAEL DENNING	El <i>impeachment</i> como forma social	75
OWEN HATHERLEY	El gobierno de Londres	93
SHAOHUA ZHAN	La cuestión de la tierra en China	131

## CRÍTICA

CHRIS BICKERTON	La persistencia de Europa	153
TERRY EAGLETON	Ciudadanos de Babel	161
LOLA SEATON	¿Ficciones reales?	168
JOHN MERRICK	Dorando la Gran Bretaña de posguerra	182

---

[WWW.NEWLEFTREVIEW.ES](http://WWW.NEWLEFTREVIEW.ES)

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

INSTITUTO  
**25M**  
DEMOCRACIA

**ts**  
traficantes de sueños

---

[SUSCRÍBETE](#)

ROHANA KUDDUS

## LIMONCILLO Y PLEGARIAS

**C**UANDO EN ENERO empezaron a difundirse las noticias sobre el brote del COVID-19, la actitud general en Indonesia fue de indiferencia. En febrero, los países vecinos –Filipinas, Singapur, Malasia, Australia– empezaron a informar sobre un número creciente de casos, pero los funcionarios públicos continuaron describiendo el virus como un fenómeno extranjero que no iba a cruzar nuestras fronteras. El ministro de Sanidad –un antiguo médico militar cuyo dudoso historial incluye la venta de un controvertido tratamiento de «enjuague cerebral», de su propia invención, para casos de embolia– declaraba orgullosamente que Indonesia era «inmune» al COVID-19 gracias a la «oración». Cuando el 1 de febrero doscientos cuarenta y tres connacionales fueron repatriados de Wuhan y enviados a la lejana isla de Natuna en el noroeste del país –sin efectuar ninguna advertencia previa a las autoridades locales y a residentes, quienes mostraron toda su indignación– se dijo que después de dos semanas de cuarentena y observación no mostraban ningún síntoma; más tarde se supo que nunca se les hizo la prueba para detectar el virus. Todavía en marzo, los controles en los aeropuertos permanecían relajados y a los viajeros no se les tomaba la temperatura, al tiempo que se distribuían tarjetas de alerta sanitaria caducadas, que contenían información sobre el MERS, el SARS y la gripe aviar en vez de sobre el COVID-19. Mientras tanto, el ministro de Turismo prometía inyectar casi 5 millones de dólares en el tambaleante sector turístico y de viajes.

Una vez que el 2 de marzo se anunciaron formalmente los dos primeros casos, los gobiernos locales todavía vacilaban sobre las medidas generales

necesarias para contener el brote. La manera en que se informó de estos dos casos resulta indicativa. Después de que una madre y su hija fueran erróneamente diagnosticadas con bronquitis y tifus, la pareja exigió una prueba de coronavirus de cuyos resultados se enteraron no por el personal del hospital, sino por medio de una televisada conferencia de prensa ofrecida por el presidente Jokowi<sup>1</sup>. Después de que sus datos personales fueran filtrados *online* por un funcionario del gobierno, ambas mujeres fueron acosadas por supuestamente haber traído el virus a Indonesia. Circularon falsas noticias que decían que la hija se había contagiado después de «bailar con un turista» en un club, tras lo cual los principales medios de comunicación la condenaron por su «disoluto comportamiento». Este triste precedente desalentó a muchos indonesios a presentarse para someterse a la prueba de detección del virus. Había un discurso abrumador, promovido por funcionarios públicos y religiosos, que decía que contraer el virus era muestra de dudosa religiosidad. El Consejo de los Ulamas, por ejemplo, financiado por el Estado y presidido por el vicepresidente Ma'ruf Amin, afirmaba en un comunicado de prensa el 3 de marzo que el virus era una reprimenda de Alá a aquellos que comían *haram*, esto es, alimentos prohibidos por la religión islámica.

Esta actitud empezó a cambiar después de que el país viera el aislamiento y la cuarentena decretada en Malasia el 18 de marzo. En Malasia los contagios se habían disparado hasta los quinientos sesenta y seis casos, que fueron vinculados a una reunión de dieciséis mil personas en una mezquita a finales de febrero. La reunión había sido organizada por Tablighi Jamaat, una organización evangélica-musulmana de alcance global. Además del hecho de que seiscientos noventa y seis indonesios habían acudido al evento, estaba previsto otro festival de Tablighi Jamaat, que se iba a celebrar en la regencia de Gowa, en la provincia de Sulawesi. Aunque el gobierno canceló finalmente la celebración, ya se habían reunido anticipadamente alrededor de diez mil fieles procedentes de catorce países diferentes<sup>2</sup>. Llegados a este punto, el Consejo de los Ulamas cambió el rumbo y dictó una serie de *fatwas* para apoyar el mantenimiento de la separación física e impedir reuniones religiosas masivas. No todo

---

<sup>1</sup> Johannes Nugroho, «Why Indonesia's Response to COVID-19 Outbreak Has Come under Scrutiny», *Today*, 9 de marzo de 2020.

<sup>2</sup> De acuerdo con el Pew Research Center, Tablighi Jamaat es uno de los mayores movimientos religiosos del mundo, con seguidores en más de ochenta países incluyendo Indonesia, Pakistán, Bangladés, India, Malasia y Estados Unidos. *The New York Times* calificó su reunión en Malasia como «el mayor difusor conocido de la pandemia en el sudeste de Asia».

el mundo estuvo de acuerdo: algunos insistieron en que la ley del Estado no debía interferir con los rituales sagrados y un antiguo general afirmó que las restricciones eran parte de una conspiración islamofóbica para impedir el cumplimiento de los deberes religiosos.

Aunque los factores religiosos han jugado un papel importante en la elaboración de las respuestas a la crisis, las tensiones y la competencia entre dirigentes nacionales y regionales han afectado a los improvisados planteamientos para contener al COVID-19. A pesar de que el gobierno nacional había declarado que no podían imponerse medidas de cuarentena sin su explícita aprobación, muchos dirigentes regionales han desafiado la orden e implantado sus propios confinamientos<sup>3</sup>. Un ejemplo de ello es el actual enfrentamiento entre el presidente Jokowi y el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, un antiguo aliado convertido en rival con un ojo puesto en las elecciones presidenciales de 2024. Con más del 50 por 100 de los casos originados en el área metropolitana de Yakarta, Baswedan ha estado pidiendo el confinamiento para prevenir el *mudik*, es decir, el regreso de los trabajadores migrantes a sus pueblos de origen, lo cual era especialmente urgente a la vista de la llegada del mes de ayuno del Ramadán y las fiestas de Idul Fitri en mayo, cuando habitualmente se produce un éxodo masivo de los centros metropolitanos, especialmente de Yakarta.

De acuerdo con algunos expertos en sanidad pública, la prevención del *mudik* es fundamental para detener la propagación del virus fuera de su epicentro. Pero otros están preguntando si las restricciones en el transporte pueden ser contraproducentes. El 16 de marzo, cuando el transporte público en Yakarta fue apresuradamente reducido y se levantó la limitación a la circulación de automóviles basada en las matrículas pares e impares, se produjo una saturación de trenes y autobuses así como un atasco generalizado en las carreteras<sup>4</sup>. Mientras los dirigentes políticos continúan con sus forcejeos, se ha anunciado una serie de normas bastante confusas y se han emprendido una serie de acciones carentes de toda coordinación. Algunas regiones han cerrado las escuelas, las reuniones públicas y las carreteras para restringir el movimiento hacia sus demarcaciones. Tegal, una pequeña ciudad de alrededor de 240.000

---

<sup>3</sup> Marchio Irfan Gorbiano y Ghina Ghaliya, «Turf War Undermines COVID-19 Fight in Indonesia», *Jakarta Post*, 1 de abril de 2020.

<sup>4</sup> Yakarta tiene una normativa de tráfico que solo permite la circulación alterna de los coches, según sus matrículas sean pares o impares.

habitantes situada en Java Central, bloqueó sus fronteras con barreras móviles de cemento después de producirse un positivo. Surabaya, la segunda ciudad de Indonesia, que tiene una población de 13 millones de personas, pero que apenas cuenta con infraestructuras de transporte público, está planeando prohibir la entrada a conductores sin documentos de identidad o matrículas de la ciudad. Papúa ha restringido la entrada por puertos y aeropuertos desde el 26 de marzo. Por el contrario, Prabumulih, otra pequeña ciudad de Sumatra con una población de 161.000 personas, que tenía cuatro casos de contagio y un director de hospital fallecido por culpa del virus, se ha negado a imponer ninguna clase de confinamiento.

Mientras tanto, la policía ha recibido carta blanca para cerrar cafés, puestos de mercados, eventos públicos y ceremonias religiosas –incluyendo bodas y oraciones públicas– en una medida que permitirá el aumento de la extorsión y la represión de las protestas. Agobiados por una combinación de pérdidas de empleo, caída de los ingresos y miedo a restricciones arbitrarias de los viajes, durante las semanas finales de marzo alrededor de catorce mil migrantes, trabajadores informales y asalariados, abandonaron Yakarta solamente en autobús, sin contar a los que viajaron por barco, motocicleta o automóvil; el número de despidos es probable que sea mucho mayor que los setenta y dos mil ya reconocidos, ya que la mayor parte de la fuerza de trabajo pertenece al sector informal. En sus pueblos natales la comida es más barata y los alquileres más bajos, pero el porcentaje de personas mayores y vulnerables es mayor, mientras que las instalaciones sanitarias –allí donde llegue a haberlas– son muy limitadas.

\*

Comparados con las áreas más golpeadas por el virus, los 1.528 casos registrados en Indonesia hasta el 31 de marzo parecen una cifra baja. Pero la cifra ha crecido con rapidez para superar a los países vecinos y convertirse en la más elevada de la región. También se sospecha que el número de víctimas –hasta el 4 de abril todavía por debajo de las doscientas según datos oficiales– sea sensiblemente mayor. En un país de más de 260 millones de habitantes solamente se han realizado 7.621 pruebas (menos de 3 por cada 100.000 habitantes), y solamente en Yakarta se han producido cerca de cuatro mil cuatrocientos entierros en marzo, el 40 por 100 más que en cualquier otro mes desde enero de

2018<sup>5</sup>. Además de las habituales razones para no informar –la limitada capacidad para hacer pruebas y el continuo retraso en el diagnóstico– la gente también puede renunciar a informar sobre el virus por miedo a quedar marginada. Después del tratamiento de las dos primeras pacientes, ha habido informes sobre residentes a los que se les ha negado el entierro, mientras que a sus familias e incluso a personal sanitario se les expulsaba de sus vecindarios.

Indonesia tiene una sanidad pública crónicamente subfinanciada. El gasto en sanidad solo llega al 3,12 por 100 del PIB, mientras que el número de camas de hospital por cada mil habitantes es solamente de 0,82 y el número de médicos de 0,2, comparado con las 3,4 camas y 4,09 médicos por cada mil personas en el caso de Italia. El seguro médico público, el BPJS, ha crecido drásticamente durante la década pasada, pero también sufre una mala administración y arrastra un enorme déficit. Entre los pobres, especialmente en los vecindarios *kampung* y las áreas rurales, hay cierto grado de recelo y desconfianza hacia el BPJS, así como hacia médicos y hospitales, basado en la experiencia de recibir costosas recetas de cuestionable eficacia, tiempos de espera discriminatorios, largos periodos sin tratamiento o incluso de correr el riesgo de ser retenidos en hospitales. Si no pueden permitirse acudir a la sanidad privada, la mayoría de la gente prefiere ir a los curanderos tradicionales, a los centros de salud comunitarios o automedicarse con brebajes de hierbas de la medicina *jamu*. El propio Jokowi ha estado recomendándolos para luchar contra el virus, añadiendo una dosis de retórica nacionalista a estas bebidas tradicionales. Después de que una catedrática de medicina indonesia afirmara que sus investigaciones habían demostrado la eficacia del jengibre, la cúrcuma y el limoncillo para alcanzar la inmunidad, la demanda de *jamu* y sus ingredientes *empon-empon* se ha disparado, haciendo que sean todavía menos accesibles para los pobres.

Como en otros países, las clases altas y medias fueron las que pudieron permitirse empezar pronto a acumular reservas. Los confinamientos en Wuhan y Singapur en enero provocaron un pánico que llevó a la compra de artículos de primera necesidad, que se almacenaban para uso personal o se revendían a mayor precio. Desde la última semana de enero la gente informó sobre dificultades para encontrar mascarillas y desinfectantes, y

---

<sup>5</sup> Tom Allard, Kanupriya Kapoor y Stanley Widianto, «Exclusive: Jump in Jakarta Funerals Raises Fears of Unreported Coronavirus Deaths», Reuters, 3 de abril de 2020. La investigación estaba basada en un examen de las estadísticas del Departamento de Parques y Cementerios de la ciudad.

los precios se dispararon a partir de entonces. También desaparecieron los trajes de protección contra materiales peligrosos (visiblemente utilizados para ir a tiendas de alimentación) y los pulverizadores de alcohol (publicitados en los medios sociales como medidas para mantener libres de virus los teléfonos móviles), para consternación de los sanitarios que trabajaban en primera línea. Estos excesos, combinados con la inicial tasa del 1 por 100 de fallecimientos entre las personas afectadas y la despreocupada respuesta del gobierno indonesio, hicieron que muchos consideraran al COVID-19 como una «enfermedad de ricos» y se negaran a tomarlo en serio. Para cuando el gobierno empezó a emitir advertencias sanitarias y a cerrar espacios públicos durante la tercera semana de marzo, las estanterías vacías y los precios desorbitados dejaron al personal médico y a los pobres sin los suministros básicos o la protección elemental.

Las divisiones de clase en Indonesia se han vuelto más evidentes desde la llegada del COVID-19, dando un nuevo significado al término «distanciamiento social». Resulta revelador que los términos ingleses que comúnmente se asocian con la pandemia —no solo «distanciamiento social», sino «distanciamiento físico», «trabajo desde casa», «confinamiento»— aparecen con regularidad sin traducir en los discursos de los dirigentes, documentos normativos, folletos informativos, señales de tráfico e informes de los medios de comunicación. Solamente más tarde los funcionarios cayeron en la cuenta de que estos términos agravaban la confusión de las clases trabajadoras, de los indonesios que no hablan inglés, que difícilmente pueden permitirse perder un día de trabajo y menos aún unirse a videoconferencias. Aunque Indonesia a menudo alardea de sus tasas de crecimiento económico del 5 por 100, más de 100 millones de sus habitantes todavía ganan menos de 1,5 dólares diarios y viven en áreas donde la conexión a Internet es irregular y los portátiles un lujo. La consigna de «Quédate en casa» en abarrotados vecindarios *kampung*, donde el acceso al agua limpia no está garantizado, no significa que se mantenga el distanciamiento físico. Y en las áreas rurales y en las remotas regiones insulares más allá de Java, a donde ha regresado la gente a medida que van aumentando los despidos, las cosas sucederán mucho más calladamente que en la capital, que acapara el 80 por 100 de la cobertura informativa.

\*

El 31 de marzo el Estado finalmente anunció una Regulación Gubernamental, que incluye un conjunto de paquetes de estímulo

valorado en 405,1 billones de rupias (24,6 millardos de dólares), que se desglosan en 150 billones para programas de recuperación económica, incluyendo una reestructuración del crédito y la financiación para empresas pequeñas y medianas; 75 billones para gastos en sanidad; 110 billones para asistencia social y 70,1 billones para incentivos fiscales y créditos para empresas. Las nuevas medidas de previsión social se basarán en transferencias en metálico mediante tarjetas, con unos términos y condiciones que dejan el sistema a merced de trabas burocráticas y pequeñas extorsiones. Queda por ver cómo se materializarán estas medidas<sup>6</sup>. Para financiarlas ha quedado en suspenso hasta 2022 el límite del 3 por 100 del PIB impuesto sobre el déficit del presupuesto del Estado, una decisión sin precedentes desde la crisis financiera asiática de 1997, que catalizó la revuelta que acabó con los treinta y tres años de gobierno de Suharto. Con un flujo menguante de rupias, las consecuencias fiscales del COVID-19 serán considerables y sus ramificaciones políticas, especialmente después de las masivas protestas que se produjeron el pasado año en el país, podrían ser importantes<sup>7</sup>.

Por ello no sorprende que Jokowi también incluyera en la nueva Regulación la puesta en marcha del «distanciamiento social a gran escala», en vez de la ley de cuarentena que exige que el gobierno central asegure el suministro de las necesidades básicas. Se introdujo un artículo sobre la «emergencia civil», basado en una vieja ley marcial de la era de Sukarno, como la «última opción si las cosas se ponen realmente mal». Esta norma proporcionaría los fundamentos legales para aplicar medidas más represivas: intervenir los servicios de noticias y emisoras de radio; interceptar conversaciones en teléfonos o despachos; limitar la encriptación e incluso los idiomas extranjeros; prohibir la utilización de ciertos instrumentos de comunicación; disolver reuniones, etcétera. Como muchos gobernantes en todo el mundo, Jokowi ha explotado la pandemia para aumentar la precisión del control y la vigilancia a escala nacional. También se ha desplegado una nueva aplicación indonesia llamada PeduliLindungi (Proteger y cuidar), inspirada en TraceTogether, la red abierta de Singapur, con el objetivo de registrar posibles casos de contacto entre individuos en caso de infección. La recogida de datos personales puede parecer inocua en tiempos de pandemia, pero añadida a la

---

<sup>6</sup> Algunos conductores de viajes compartidos *online* ya han protestado, porque la relajación del crédito prácticamente no ha funcionado, lo cual ha provocado un aumento de los suicidios por razón de deudas.

<sup>7</sup> Sobre las protestas de 2019 véase, Rohana Kuddus, «Sorpresa en septiembre», *NLR* 120, enero-febrero de 2020.



inexistencia en Indonesia de una ley de protección de datos, fácilmente se podría utilizar para controlar las actividades de periodistas, activistas, trabajadores sexuales y miembros de la comunidad LGBTQ<sup>8</sup>.

El nuevo Parlamento también ha aprovechado la oportunidad para continuar elaborando una controvertida ley general denominada de «Creación de mercado de trabajo» o *Cipta Lapangan Kerja*, que los activistas, periodistas y estudiantes –con su característico ingenio– han abreviado como *Cilaka* («maldita»). El proyecto de ley promete reformar quince capítulos y ciento setenta y cuatro artículos de un total de setenta y cinco leyes, supuestamente para optimizar las prácticas empresariales, atraer la inversión, impulsar las oportunidades de empleo y estimular el crecimiento. Los grupos sindicales, los activistas medioambientales, las asociaciones de campesinos y las organizaciones de mujeres han protestado con rotundidad ante la falta de protección que ofrece la ley a los trabajadores y a los derechos de las mujeres, junto a su significativa reducción de las normas sobre protección medioambiental aplicables a las empresas contaminantes. Las protestas en las calles y en los campus universitarios contra la *Cilaka* ya se habían extendido por diferentes ciudades antes de la pandemia. Sin embargo, el gobierno está decidido a hacer que sea aprobada por el Parlamento mientras el virus limita los esfuerzos opositores de los grupos de base. También ha decidido no aplazar las próximas elecciones regionales, a pesar de los inevitables problemas en las votaciones. El aumento de los poderes ejecutivos de Jokowi, el desarrollo de una infraestructura de vigilancia y las limitaciones a la libertad de movimiento y asociación durarán más que el propio virus y quizá afecten a la vida política del país durante los próximos meses y años.

Surabaya, 4 de abril de 2020.

---

<sup>8</sup> Para una discusión sobre la app TraceTogether de Singapur, que probablemente sea adoptada por muchos otros países, véase, Kirsten Han, «TraceTogether and Emergency Measures amid an Outbreak», [wethecitizens.substack.com](https://wethecitizens.substack.com), 25 de marzo de 2020.